

Santiago, dos de septiembre de dos mil veintidós.

Visto:

En estos autos RIT O-325-2020, RUC 2040271109-5, del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, por sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se acogió la demanda de reconocimiento de relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido, unidad económica, subterfugio y pago de prestaciones laborales, dentro de las cuales se incluye la solución de las remuneraciones que se devenguen hasta la convalidación de la desvinculación laboral, que doña Mayerlin Lissette Carrasco Riquelme interpuso en contra de Concrete Engineering SPA y Guillermo Orlando Reygadas Molina.

Con la finalidad de invalidar esta decisión, la parte demandada presentó recurso de nulidad que fue rechazado por una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, mediante resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.

En contra de esta sentencia, la misma parte dedujo recurso de unificación de jurisprudencia.

Se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de los tribunales superiores de justicia. La presentación debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de los fallos que se invocan como criterios de referencia.

Segundo: Que, conforme se expresa en el recurso, la materia de derecho que se propone unificar consiste en *“determinar si la obligación que le asiste al empleador de pagar las remuneraciones y demás prestaciones laborales desde el término de la relación laboral hasta la convalidación del despido, se aplica desde el reconocimiento de dicha relación laboral por sentencia ejecutoriada, o desde el inicio efectivo del vínculo.”*

Reclama que la sentencia que reconoce la existencia de la relación laboral es de naturaleza constitutiva de derecho, de forma tal, que no procede aplicar la sanción de nulidad del despido, tal como lo indican los pronunciamientos de contraste que adjunta.



Solicita se acoja el recurso, se unifique la jurisprudencia y, acto seguido, sin nueva vista, se dicte sentencia de reemplazo que acceda a sus pretensiones.

Tercero: Que, para efectuar el ejercicio de comparación propio del recurso de unificación, se debe constatar la similitud de la materia de derecho resuelta en el fallo impugnado y en los que se ofrecen para su confrontación, semejanza que es, además, necesaria cuando se contrastan las circunstancias de contexto que motivaron la decisión que se reprueba, con las particularidades que justificaron la orientación jurisprudencial divergente.

En efecto, para la procedencia del recurso en análisis, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se sostengan concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una discrepancia que deba ser resuelta y uniformada por esta Corte.

De este modo, para que prospere un arbitrio como el de la especie, y como cuestión previa, es menester verificar si los hechos establecidos en el pronunciamiento impugnado son susceptibles de ser comparados con aquellos que sirven de fundamento a las sentencias que se invocan para su contraste, puesto que, sobre la base de dicha identidad o semejanza, será posible homologar decisiones contradictorias.

Cuarto: Que, según lo expuesto, es necesario consignar los hechos establecidos en la instancia que conciernen al presente recurso:

1.- Las partes estaban vinculadas por un contrato individual de trabajo desde el 14 de enero de 2019 hasta el 5 de marzo de 2020.

2.- Desde el 14 de enero de 2019 al 14 de marzo de ese año la relación se materializó en un contrato a honorarios y luego se escrituró el contrato individual de trabajo.

3.- Los demandados no pagaron las cotizaciones previsionales de la actora por los meses de enero y febrero del año 2019.

4.- Los demandados corresponden a una sola unidad productiva, con dirección laboral común, utilizando una nueva razón social para dificultar la individualización del empleador y la identificación de su patrimonio.

Quinto: Que, sobre la base de los hechos establecidos, la judicatura del fondo consideró que los demandados se encontraban en la situación del artículo



162, inciso quinto, del Estatuto Laboral y accedió, en lo atinente a este recurso, a la demanda de nulidad del despido.

El fallo recurrido, conociendo del motivo de nulidad contenido en el artículo 477 del Código del Trabajo, denunciándose infringido el artículo 162 del mismo cuerpo legal resolvió que *“...habiéndose establecido la existencia de una relación laboral en los términos de los artículos 7° y 8° del Código del Trabajo, y que la causal invocada no ha resultado justificada, conforme a los razonamientos ya citados, no cabe sino concluir que las normas legales que se dicen infringidas, han sido en concepto de esta Corte correctamente interpretadas y aplicadas, circunstancias latamente analizadas por el a quo y que son el sustento de las restantes prestaciones a que ha sido condenado y constituyen además el fundamento de los restantes acápites que sustentan su recurso de nulidad.”* Concluyendo que *“...cabe hacer presente que la causal de infracción de ley señalada en el artículo 477 del Código del Trabajo, implica aceptar los hechos establecidos en la sentencia, por lo que la causal alegada queda sin sustento fáctico, ni tampoco legal lo que es motivo suficiente para su rechazo, resultando en tal sentido el recurso en análisis falto de argumentos, vago e impreciso.”*

Sexto: Que, para efectos de contraste, la parte demandada presentó tres sentencias emanadas de esta Corte, en los N°36.601-2017, N°37.339-2017 y N°42.863-2020, todas substanciadas contra organismos públicos y en las cuales se concluye respecto a la sanción del artículo 162 del Código Laboral, en las dos primeras, que el castigo aludido ha sido previsto para el empleador que ha efectuado la retención correspondiente de las remuneraciones correspondientes y no entera los fondos en el organismo respectivo, es decir, no cumple su rol de agente intermediario y ha distraído dineros que no le pertenecen en finalidades distintas para las cuales fueron retenidas. Agrega que, al dirimirse la controversia de la existencia o no de una retención laboral en la sentencia, no pudo haber retención de cotizaciones y, por ende, no procede aplicar la sanción contemplada para la nulidad del despido. Y, en la última, que tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la



hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido. Agregando que la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

Séptimo: Que, efectuado el análisis de procedencia del recurso que se analiza, se debe concluir que no puede ser acogido, por cuanto los hechos establecidos en los fallos presentados a modo de contraste difieren de los comprobados en el recurrido.

En efecto, en la decisión que se revisa, quedó acreditado que la demandante fue contratada dos meses a honorarios por particulares y luego se regularizó celebrando un contrato individual de trabajo, concluyendo la magistratura que siempre existió entre las partes una relación laboral y que, en consecuencia, al no haber pagado los demandados las cotizaciones de seguridad social en los dos meses amparados por el vínculo civil, era procedente la sanción de nulidad del despido.

A diferencia de este razonamiento, en los de contraste la situación fáctica es diversa, ya que se trata de personas naturales que celebran contratos a honorarios con organismos del Estado por permitirlo el estatuto especial que los regulan, convenciones que poseen en su origen una apariencia de legalidad, no como se determinó en la recurrida que el contrato a honorarios de la demandante obedecía a una “informalidad laboral”. Luego, en la sentencia dictada en los autos N°42.863-2020, se añade que el Estado se encuentra imposibilitado de solucionar las remuneraciones devengadas con motivo de la declaración de nulidad del despido, situación que no acontece respecto de los particulares, más aún cuando aquellos utilizan prácticas sancionadas por la ley, como ocurre en este proceso, para eludir sus obligaciones para con sus dependientes, lo que motivó que fuera sancionado conforme lo dispone el artículo 507 del Código del ramo.

Octavo: Que teniendo en consideración lo expuesto, queda de manifiesto que las sentencias acompañadas no contienen una distinta interpretación sobre la materia de derecho objeto de este juicio, toda vez que se erigieron sobre la base de circunstancias que en los hechos eran diversas, no cumpliéndose, por tanto,



con el presupuesto previsto en el inciso segundo del artículo 483 del Código del Trabajo, lo que conduce a desestimar el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°91.730-2021.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., y el ministro suplente señor Raúl Mera M. No firma el ministro señor Simpertigue y el ministro suplente señor Mera, obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso el primero y por haber terminado su periodo de suplencia el segundo. Santiago, dos de septiembre de dos mil veintidós.



PKKXXBDZFXE

En Santiago, a dos de septiembre de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

